

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE HUMANIDADES
ESCUELA DE PERIODISMO
HISTORIA DE CHILE II

Expropiaciones a empresas:

El quiebre de la legalidad del gobierno de Allende

Ayudante: Rolando Álvarez
Estudiante: Héctor Orellana

Santiago, diciembre de 2003

Introducción

El primer gobierno marxista elegido por votación popular en el mundo fue el de Salvador Allende, que dirigió Chile desde 1970 a 1973. Su lema, “vía chilena al socialismo”, se caracterizó por ser un tipo de régimen que buscaba consolidarse a través de la vía legal.

Allende lo realizó todo bien, excepto en lo que se refería al Área de Propiedad Social, pues al expropiar empresas y su posterior discusión en el Congreso, puso en tela de juicio su legitimidad ante la población y, sobre todo, sobre sus opositores, los que eran bastantes.

Este trabajo pretende dar a conocer una visión de lo que, según mi juicio, fue la principal debilidad de Allende, lo que permitió un forado en su complejo mandato, el que fue vencido por el caos y lo conspirativo de los obreros, quienes vieron en el “Doctor” la esperanza de concretar por primera vez en su vida el sueño de dirigir las empresas y no ser uno más, dominado por el empresario.

El comienzo de la revolución con “empanada y vino tinto”

El programa de la izquierda, bajo el eslogan “vía chilena al socialismo”, proponía la nacionalización de la Gran Minería del Cobre de los monopolios industriales estratégicos, del comercio exterior, de los bancos, los seguros y las grandes empresas en sectores claves de la economía – tales como la distribución, la energía y el transporte-, todas las cuales pasarían a constituir el Área de Propiedad Social, manejada por el Estado.¹

En el plano económico, se proponía una redistribución de las riquezas más equitativa, mediante la aplicación de programas específicos en el área de salud, vivienda, trabajo y educación. Además, el eventual gobierno de Allende se propuso realizar este programa mediante reformas constitucionales y legales, haciendo siempre uso de la vía institucional

El presidente Salvador Allende dio pie a su programa de trabajo, utilizando todos los medios legales con los que disponía, pues no tenía mayoría en el Parlamento. Es por eso que utilizó el mismo sistema de mercado para estatizar la banca y comprar las acciones de las grandes industrias.

Pero uno de los puntos de mayor osadía fue la utilización de los “resquicios legales” (como lo llamó la oposición), que permitía la expropiación de fábricas que pusieran en riesgo el abastecimiento de la población, pudiendo aducir una variedad de motivos, como que su productividad era deficiente.

Esta ley tenía data de la República Socialista de 1932 que duró sólo 12 días, de Marmaduke Grove, la cual nunca había sido derogada. O como lo describe Tomás Moulian, “Como si efectivamente estuviéramos en la Inglaterra de los laboristas de la postguerra, se nacionalizó la banca usando mecanismos de mercado y se nacionalizaron industrias o comercios

¹ Sofía Correa, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn-Holt, Claudio Rolle, Manuel Vicuña; HISTORIA DEL SIGLO XX CHILENO, Editorial Sudamericana, 2001.

mayoristas utilizando ciertos residuos legales de la efímera “república socialista” de 1932. Pero en Chile los enemigos no se limitaban a discutir con fiereza en la Cámara de los Comunes”².

La existencia de esta causal expropiatoria incentivó a los obreros más politizados (mayoritariamente de ultraizquierda) a hacer uso de la huelga para paralizar la producción de las fábricas en las cuales trabajaban, y provocar de esta manera su intervención por agentes del estado y su eventual expropiación. De esta forma, el programa del gobierno fue desbordado por la acción de las masas, muchas veces con apoyo de funcionarios públicos y militantes de los partidos de la Unidad Popular, todos los cuales presionaban al Ejecutivo para acelerar la revolución.

Luego de la elección como Presidente del doctor Salvador Allende Gossens, muchas empresas fueron abandonadas por sus dueños, lo que técnicamente se llamaba “*lockout patronal*”. Ante ese hecho, los trabajadores quedaron la más absoluta indefensión, viéndose el Gobierno de la época en la necesidad de intervenirlas para que procedieran a reanudar faenas.

En cuanto al proceso de las expropiaciones, se dictaba un Decreto Supremo, que llevaba la firma del el subsecretario de la cartera, ministro al que correspondiere la expropiación y el Presidente de la República, el que era tomado a razón por la Contraloría General de la República, que veía la legalidad del decreto y, cuando todo estaba en norma, se publicaba en el Diario Oficial. Luego de todo este proceso, el interventor, que en la práctica reemplazaba al patrón, asumía la administración de la empresa. Pagaba las remuneraciones de los trabajadores, sus cotizaciones previsionales, fijaba las políticas de la empresa, estaba encargado de adquirir los productos para hacerla funcionar. Tenía todas las atribuciones para dirigir la empresa. Si

² Tomás Moulian, CONVERSACIÓN INTERRUMPIDA CON ALLENDE, Universidad ARCIS, LOM Ediciones, 1998.

había un área que el interventor no dominaba, recurría a todos los organismos del Estado, como el Servicio de Cooperación Técnico.

El *nock out* para Allende

Muchas de estas expropiaciones fueron objetadas por los tribunales, dando inicio un complicado conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial, pues tanto los trabajadores como los militantes de la UP siguieron presionando por la intervención, aumentando los niveles de confrontación social y política, y dejando en evidencia la incapacidad del gobierno para controlar sus bases.

A un año de iniciado el gobierno de la UP, el Estado controlaba 62 industrias y tenía bajo su administración 39 empresas requisadas. Para 1973 más de 200 empresas pasaron al Estado. La estrategia del gobierno, sumada a la presión de la militancia de izquierda, agudizó los conflictos con la oposición, tanto de derecha como demócratacristiana, quienes estaban alarmados por las expropiaciones, que a su juicio, transgredía la legalidad del país.³

En junio de 1971, los parlamentarios de la Democracia Cristiana, Juan Hamilton y Renán Fuentealba presentaron un proyecto de ley para combatir las expropiaciones. Este proyecto establecía que toda industria que pasara a la APS, antes tenía que ser evaluada por el Congreso Nacional, que se debían devolver algunas industrias y que como máximo podían quedar 90 empresas en manos del Estado.

³ Sofía Correa, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn-Holt, Claudio Rolle, Manuel Vicuña; HISTORIA DEL SIGLO XX CHILENO, Editorial Sudamericana, 2001.Op. Cit. P.266

Hasta agosto de 1973 se alargó esta discusión cuando el Senado aprobó esta ley, pero Allende la vetó. Éste fue sin duda el problema legal más grave de Allende, pues siempre dio la imagen de un gobernante amparado bajo la legalidad. Pero la Cámara apeló a la insistencia, pues decían que podía ser aprobada con el 50 % más uno de los votos. En tanto Allende sostenía que podía dársele el visto bueno a la ley sólo con dos tercios de la votación a favor, pues siempre había sido así. Pero igualmente la Cámara Alta lo da por aprobado pasando por alto la tradición que decía que cuando un Presidente vetaba una ley, sólo podía ser aprobada en segunda instancia con los dos tercios de los votos. El 22 de agosto de 1973 el Parlamento declara “ilegal” el gobierno de Allende y el Poder Judicial le da la razón al Senado. Desde este instante se podría hablar de la “agonía de Allende”.

Para el gobierno de Allende era de suma urgencia controlar las empresas que podían ser puntales en la economía y el abastecimiento del país, tal como lo relata el ex interventor del gobierno de la UP, Héctor Orellana, quien trabajó de 1970 a mayo de 1974 en la oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Trabajo. “En el caso de Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se intervino a empresas de no gran envergadura económica. Eran pequeñas empresas. En mi caso fui interventor de dos: la fábrica de calzados Topsy, que tenía 10 trabajadores y la otra era una fábrica de confecciones, Carlos Contador Corrotea, de unos 35 trabajadores. Cuando asumí ambos cargos, el interventor se llevó la sorpresa de ver que en ambos casos no existían prácticamente activos para hacerlas funcionar. Antes de hacer abandono los empleadores, se llevaron toda la información y, desde el punto de vista económico, no existían recursos para hacer funcionar las empresas, por lo que hubo que recurrir a préstamos bancarios y usar algunos órganos del Estado para que se

podían adjudicar propuestas para que pudieran seguir funcionando. Por tanto, la labor de los interventores fue más que nada liquidar los activos, porque era imposible que las empresas pudieran seguir continuando. Se debían cotizaciones previsionales, a acreedores particulares, al Servicio de Impuestos Internos, el pago de contribuciones. Técnicamente eran empresas quebradas. Y se trataba de buscar nuevas colocaciones a los trabajadores para que pudieran continuar trabajando”.

De esta manera se justificaba la acción del gobierno de Allende, pues se entraba a proteger a trabajadores que estaban a punto de entrar a ser parte de las estadísticas de nuevos cesantes, pero el costo era bastante alto, pues los empresarios dejaban prácticamente vacías sus empresas como una manera de hacer un complot contra el gobierno socialista.

El obrero envuelto en lo festivo y lo conspirativo

Moulian explica que en Chile se vivió un proceso de caotización de la sociedad, tanto en lo que respecta al desenfreno “festivo” y “conspirativo”. En lo que se refiere a lo “festivo” es el desate de la expresividad plebeya, sea ésta ritual o transgresora. Esa es una reacción esperable por parte de los ignorados por la vida y por la historia que, nombrado y señalados como protagonistas, realizan gestos de poder micro y macrosociales, desarrollan la potencia con que han sido investidos.

Y lo que se refiere a lo “conspirativo”, es el resultante de la lucha de clases. Especialmente en una situación como la chilena, donde el proceso revolucionario se desarrolló sin la previa destrucción del Estado burgués como lo enseñaba la teoría. Como parte del desenfreno, y que mayormente contribuyó a la caotización, fue la política económica de orientación populista, que era bastante dadivosa en materia distributiva. Se trataba de una estrategia que, para ganar el presente, se jugaba el futuro, lo

arriesgaba y lo hipotecaba. Las medidas de alzas salariales aplicadas tenían la virtud de reactivar la economía, disminuir las desigualdades y ampliar la base social del gobierno, en vista de la confrontación electoral de abril de 1971.

Moulian explica que luego del triunfo de Allende se vivió en un período de “fiesta”, que es una de las dimensiones inherentes a los procesos revolucionarios, por cuanto en ellos se produce una subversión de los órdenes y jerarquías subjetivas de poder y por tanto se rompen tabúes simbólicos, diferenciaciones sociales establecidas y cristalizadas: cambia el tono y las modalidades del trato de obreros a gerentes, de criadas a señoras, de campesinos a patrones o administradores. Los poderes se desmoronan en el espacio de su cotidianeidad. Es en esos ámbitos del disciplinamiento social donde la revolución en sus dimensiones moleculares, en cuanto transgresión de pautas de autoridad y jerarquía en el trato, se ponía en acto diariamente. Pero además de esa transgresión microsocial existía la otra, las ocupaciones de fábricas, fundos, sitios, que el gobierno aceptaba y legitimaba, incluso legitimaba. Esto representa pasar al límite, amenazar al fundamento mismo del orden, porque constituía una burla al principio sacrosanto de la propiedad burguesa.⁴

En este mismo sentido, Alfredo Jocelyn-Holt es de la misma idea. “La UP fue una gran fiesta. Fue una estruendosa celebración de los marginados. En el sentido mucho más evidente que en el sexenio 64-70, el gobierno socialista permitió el acceso al poder hasta entonces nunca lo habían vislumbrado como propio. Entran a dirigir el país los que hasta ahora lo habían presenciado todo desde el patio trasero, o lo venían escuchando de a oídas.

⁴ Tomás Moulián, CONVERSACIÓN INTERRUMPIDA CON ALLENDE, Universidad ARCIS, LOM Ediciones, 1998. Op. Cit P. 86.

Los trabajadores después de sentirse reprimidos por décadas, vieron en el gobierno de Allende la oportunidad para poder participar en la dirección de las empresas y fue la misma convulsión social del momento la que conllevó a estos hechos que no pudieron ser frenados por nadie.

La convulsión social que existía y la presión de los trabajadores que querían intervenir en la mayor parte de las empresas posibles para tomar su administración generó el caos del gobierno de Allende. Para Orellana “el primer año fue un éxito y de ahí en adelante fue muy complicado, porque los trabajadores no escuchaban a los funcionarios del Gobierno de categorías intermedias, porque todos querían hablar con el ministro del Trabajo, pero se les hizo chico, y todos querían hablar con el Presidente. Por lo que hubo por parte de los trabajadores un despotismo bárbaro que conllevó a lo que todos sabemos. En parte ellos tienen una cuota de responsabilidad en los acontecimientos que ocurrieron con posterioridad, por la indisciplina y por el antagonismo de los mismos grupos que existían en aquella época. Unos eran más ultristas que otros. El ser revolucionario era tener más tendencia a la intervención misma de las empresas”.

Pero de todas formas se intentó reglamentar el accionar de los obreros mediante las “Normas básicas de la dirección de los trabajadores en las empresas”, las que en la práctica se llevaron a efecto, pero con todo tipo de resultados, donde destacó una empresa del área textil, EMASTRA, En Manos de Sus Trabajadores.

A más de 30 años de los hechos, el ex interventor Orellana concluye: “Uno hace un análisis de que se intervinieron empresas que eran un absurdo. Por ejemplo, existía una mina de oro que se llamaba La Fortuna. El interventor, en forma anecdótica, en su informe señaló que el único trabajador que quedó allí, ante la evidencia de que la mina se encontraba totalmente agotada, tomó su burro y fue en busca de mejores horizontes. El Estado utilizó recursos que no iban a producir ninguna utilidad”.

Una economía que se desinfló

La formación del Área de Propiedad Social de la economía fue uno de los mayores problemas de ese momento y que atrajo más controversias, lo que generó varios impasses entre el Ejecutivo y el Parlamento. Uno de los hitos fue en 1972 cuando el gobierno intentó comprar acciones de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, dando origen a una pugna con El Mercurio acerca de la libertad de prensa y el derecho de propiedad, pues vería seriamente afectados sus intereses como medio de comunicación opositor a Allende.

El primer año del gobierno fue exitoso, pues se bajó la tasa de desempleo, la inflación, fue lo que se pasó a llamar el “plan Vuskovic”. Se mejoró la calidad de vida de la población, pues se hizo un aumento salarial muy agresivo financiado por el cobre que pasó a manos del estado. Con esto se aumentó el poder adquisitivo y se aumentaba la demanda. La “capacidad ociosa” de la industria iba a empezar a producir más, por lo que se estaba aplicando una estrategia de “corte keynesiano”. Al existir más salario y más venta, se iba a tener un empresario feliz.

Además se redujo considerablemente la cesantía, que para 1971 bordeaba el orden del 6%, lo que era bastante bajo. En la actualidad han llegado por sobre el 10%, por lo que es bastante bueno para esa época considerando las problemáticas de ese entonces.

En el primer año de gobierno de Allende, hubo una especie de disciplina laboral, porque existía la perspectiva de la creación del Área Social de la Economía, todos los trabajadores querían orientarse hacia el manejo de las empresas. Eso mismo conllevó a una gran presión de tipo social que fue imposible de controlar. Desde el Presidente de la República hasta el funcionario de menor jerarquía del Estado fueron sobrepasados por esta especie de avalancha generada por la presión social del momento.

Durante el segundo, se empezaron a mostrar signos negativos en la economía, lo que era producto de acciones conspirativas tanto en el interior como en el exterior del país. Uno de los claros signos de déficit se empezó a vivir luego de la caída del precio del cobre y el descenso de la producción en general dado el estado de movilización social que abarcaba todos los

El fin que se venía venir

Para Orellana, el golpe de Estado “no fue una sorpresa para nadie. Lo único que no se sabía era el día”. Los trabajadores de los servicios públicos, con meses de antelación, se preparaban al inminente golpe, y tenían preparado defender sus fuentes de trabajo y de ahí que se generaran los “cordones industriales”, donde los partidos de ultra izquierda incluso estaban a favor de la vía armada.

El día del golpe de Estado dentro del Ministerio del Trabajo, según relata Orellana, “mucha gente fue sacada por las fuerzas militares y llevadas al Ministerio de Defensa y a continuación al Estadio Chile y luego al Estadio Nacional. Y con posterioridad llevados al norte del país, a Pisagua o a la oficina salitrera Chacabuco. Muchos estuvieron sin ningún tipo de juicio, sin que se le formularan cargos hasta el día de hoy y fueron liberados luego de ser prisioneros por más de un año y hubo funcionarios que también fueron perseguidos por los servicios de inteligencia y que hasta la fecha se encuentran desaparecidos”.

“Con anterioridad al golpe militar, hubo gente de los servicios de inteligencia que se infiltró a través de los servicios menores, vale decir los funcionarios de aseos, chóferes de ministros o subsecretarios y a algunos se les obligó trabajar como informantes del Ministerio del Trabajo”, añade.

sectores, incluidos los trabajadores.

Sin duda que los empresarios fueron los grandes aliados de la oposición. Muchos habían sido lesionados en sus intereses y no se iban a quedar de brazos cruzados viendo cómo expropiaban sus empresas.

La producción de alimentos fue insuficiente para cubrir la demanda interna, cada vez mayor al incrementarse la capacidad de consumo de los sectores más desposeídos.

En el período 1970-1973, los sectores más desprotegidos de la pirámide laboral, tuvieron por

primera vez una recompensa en lo salarial, tal como explica el abogado Orellana: “Yo era funcionario tercera categoría y dirigía la oficina de Presupuesto y Planificación del Ministerio del Trabajo, que era una categoría bastante buena y de confianza del Presidente de la República. Cualquier trabajador en esa época recibía tres a cuatro veces más que un funcionario público del nivel que estamos conversando. Eso refleja que en

las otras áreas de la economía, los trabajadores alcanzaron una serie de beneficios que tal vez nunca más vayan a lograr. Sectores de trabajadores como los peluqueros y garzones, que tenían leyes que regulaban su salario, y con la llegada del gobierno militar, fueron borradas”.

Las reservas fiscales se agotaron debido al aumento del déficit en la balanza de pagos y al congelamiento de los créditos externos. La tasa de inflación acumulada pasó del 28% en los primeros meses de 1972 a un 100% en los meses que siguieron a septiembre de ese mismo año y el espiral inflacionario no se detuvo hasta llegar a un 323% a finales de 1973, y según la oposición a un 1.000%. En tanto, la producción bajó en un 7%, la agricultura en un 23%, la minería en un 30%.⁵.

La inflación se disparó, entre otros factores, por la misma presión social en la parte económica. La exigencia de los trabajadores para obtener mayores beneficios en sus convenios colectivos de trabajo o a través de las Comisiones Tripartitas que fijaban condiciones de trabajo y remuneraciones para toda un área económica.

A partir de la asunción del gobierno militar, se puso término a la mayor parte de las reanudaciones de faenas que se habían hecho a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social a sus antiguos dueños. Todos los trabajadores que participaron por la lucha de que esas empresas fueran intervenidas, muchos de ellos fueron exonerados y algunos capturados por los servicios de inteligencia y muchos tuvieron un triste destino.

⁵ Alfredo Jocelyn-Holt, EL CHILE PREPLEJO, Ed. Planeta/Ariel, 1998

Conclusiones

- Las expropiaciones fueron un arma de doble filo para el gobierno de la UP. Por una parte se pretendía financiar la APS, pero por otra, estuvieron al margen de la ley, lo que terminó por hundir la legalidad que siempre había buscado Allende.
- El gobierno de Allende se vio sobrepasado en las demandas de los trabajadores, quienes pedían mayor participación en la toma de decisiones dentro de las empresas. Esto originó un verdadero caos.
- Tal como dice Moulian, Chile se vivió un proceso de caotización de la sociedad, tanto en lo que respecta al desenfreno “festivo” y “conspirativo”.
- “La UP fue una gran fiesta. Fue una estruendosa celebración de los marginados. En el sentido mucho más evidente que en el sexenio 64-70, el gobierno socialista permitió el acceso al poder hasta entonces nunca lo habían vislumbrado como propio. Entran a dirigir el país los que hasta ahora lo habían presenciado todo desde el patio trasero, o lo venían escuchando de a oídas”, según Jocelyn-Holt.

Bibliografía

- Alfredo Jocelyn-Holt, EL CHILE PREPLEJO, Ed. Planeta/Ariel, 1998.
- Sofía Correa, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn-Holt, Claudio Rolle, Manuel Vicuña; HISTORIA DEL SIGLO XX CHILENO, Editorial Sudamericana, 2001.
- Tomás Moulian, CONVERSACIÓN INTERRUMPIDA CON ALLENDE, Universidad ARCIS, LOM Ediciones, 1998.